



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original

INFC- 2025/469

S.J.- 45/2025

Se ha recibido en este Servicio Jurídico solicitud de informe de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, cursada por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior sobre la **«propuesta de resolución del contrato de servicios denominado “Realización de la LXXXVII Subasta Nacional de Ganado Selecto. Año 2024”»**.

A la vista de la legislación aplicable y de los antecedentes remitidos, y en virtud del artículo 4.1 de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, tenemos el honor de emitir el siguiente:

INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.

El 11 de marzo de 2025 se ha recibido en este Servicio Jurídico la referida petición de informe, acompañada de la documentación reseñada a continuación:

- a) Borrador de la orden de resolución del contrato de servicios.
- b) Informe justificativo referente a la resolución del contrato de servicios denominado “Realización de la LXXXVII Subasta Nacional de Ganado Selecto. Año 2024”, firmado por el Director General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el 19 de febrero de 2025.
- c) Orden nº 600/2025, por la que se acuerda el inicio del expediente de resolución de contrato de servicios, firmada por el Director General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por delegación del Consejero, el 24 de febrero de 2025.

d) Oficio de la División de Contratación dirigido a la mercantil Aproca Centro de Formación de Caza, Guardería y Gestión del Medio Natural, S.L. dando traslado del acuerdo de inicio de expediente de resolución del contrato de servicios que nos ocupa, firmado por la jefa de la citada división el 25 de febrero de 2025.

e) Acuse de recibo de notificación telemática relativa al oficio descrito en el apartado anterior aceptada por la mercantil Aproca Centro de Formación de Caza, Guardería y Gestión del Medio Natural, S.L., el 25 de febrero de 2025.

Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados procede efectuar las siguientes:

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA. – FINALIDAD Y CONTENIDO.

La resolución del contrato implica la extinción anticipada de un contrato ya perfeccionado, por lo que constituye un modo anormal de terminación de la relación contractual. Se trata ésta de una de las prerrogativas que la Administración ostenta en la contratación administrativa, a tenor de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en lo sucesivo, LCSP):

“Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.”

Tal y como estableció la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 129/2018, de 8 de marzo -recurso nº 921/2015- debemos remitirnos a la doctrina fijada en la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2004, conforme a la cual: *“(...) la resolución implica una extinción anticipada de un contrato perfeccionado, que constituye un modo anormal de terminación de la relación contractual por la concurrencia de alguna circunstancia en la vida*

del contrato que impide o hace inconveniente su prosecución hasta su extinción normal. De acuerdo con dicha naturaleza el incumplimiento que justifica la resolución ha de ser sustancial, no basta con cualquier apartamiento de las obligaciones asumidas en el contrato, sino que ha de afectar a la obligación esencial de una de las partes en el caso de obligaciones bilaterales o recíprocas. Esto es, de acuerdo con la jurisprudencia, tanto de la Sala Tercera como de la Primera del Tribunal Supremo, ha de tratarse de incumplimiento básico, grave, de la obligación, en el sentido de que no se realiza la conducta en qué consiste la prestación, quedando frustrado el fin objetivo del contrato o haciendo imposible la realización de la prestación por parte del contratista. O, dicho en otros términos, también en este ámbito de la resolución contractual ha de observarse el principio de proporcionalidad que exige para 19/21 resolver el que el incumplimiento afecte a la esencia de lo pactado, no bastando aducir la no realización de prestaciones, que no impidan por su entidad alcanzar el fin del contrato.”

La resolución de los contratos se rige con carácter general por lo dispuesto en los artículos 211 a 213 de la LCSP, que se refieren respectivamente a las causas de resolución, al modo de aplicación y a sus efectos. También debe tenerse en cuenta el desarrollo reglamentario realizado en los artículos 109 a 113 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, (Real Decreto 1098/2001, en lo sucesivo).

En el caso informado, la propuesta de resolución se ampara en el supuesto previsto en la letra g) del artículo 211. 1º de la LCSP, a cuyo tenor: “Son causas de resolución del contrato: (...) g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.”

El informe firmado por el Director General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con fecha 19 de febrero de 2025, recoge la constatación de la causa que fundamenta dicha propuesta; así, se establece que:

“(…) La fecha de celebración de la LXXXVII SUBASTA NACIONAL DE GANADO SELECTO estaba prevista para los días 17, 18, 19 y 20 de octubre del año 2024 (…).

La ejecución del contrato se ha visto afectada por la situación epidemiológica de la enfermedad de la Lengua Azul, tras la declaración de nuevos focos de los serotipos 1 y 8 en distintas CCAA, lo que ha llevado a declarar como zona suspendida a la Comunidad de Madrid. Dicha declaración, ha provocado la suspensión de la Subasta Nacional de Ganado Selecto y de todas las actividades que se organizan en torno a este evento tales como las jornadas técnicas y lúdicas debido al riesgo epidemiológico detectado en la región, siendo informados todos los interesados el día 11 de octubre mediante comunicado oficial de fecha 10 de octubre de 2024, (se adjunta comunicado oficial).”

Se confirma, en consecuencia, la acreditación del supuesto de hecho que faculta para instar la resolución del contrato en ejecución de conformidad con la normativa expuesta.

SEGUNDA. - SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN

El procedimiento establecido para ejercitar la potestad de resolución se encuentra regulado en los artículos 191, 212 y 213 de la LCSP. Los mismos se han desarrollado por el artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, que establece a estos efectos:

“1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, previa autorización, en el caso previsto en el último párrafo del artículo 12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros, y cumplimiento de los requisitos siguientes:

- a) Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio.*
- b) Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la incautación de la garantía.*
- c) Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la Ley.*
- d) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.*

2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el órgano correspondiente.”

Se han aportado al expediente la Orden nº 600/2025, de 24 de febrero, por la que se acuerda el inicio del procedimiento de resolución; así como la notificación de ésta al contratista y su correspondiente acuse de recibo, ambas con fecha 25 de febrero del mismo año. Transcurrido el plazo concedido, el contratista no ha formulado oposición a la propuesta de resolución. Esta última circunstancia determina que no sea necesaria la remisión a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid para la formulación de dictamen, de conformidad con las previsiones del artículo 191. 3º a) de la LCSP y el artículo 5. 3º f) d. de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, de Supresión del Consejo Consultivo.

Por otra parte, en relación al plazo de duración del procedimiento de resolución, la LCSP establece un plazo de duración de ocho meses en el artículo 212. 8º de la misma. Por el contrario, la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, desde el Dictamen nº 576/2021, de 10 de noviembre, considera que el plazo máximo de duración de los procedimientos de resolución contractual es de tres meses. Se argumenta que el artículo 212.8 de la LCSP (*“los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de ocho meses”*) ha sido declarado inconstitucional. El Fundamento jurídico 7 C, c) de la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 68/2021, de 18 de marzo -recurso de inconstitucionalidad nº 4261/2018- confirma que dicho precepto no tiene carácter básico, por lo que no sería de aplicación directa a las Comunidades Autónomas. En consecuencia, dicho órgano entiende que debe aplicarse la Disposición Final 4.1 de la LCSP que señala que *“(…) los procedimientos regulados en esta Ley se regirán, en primer término, por los preceptos contenidos en ella y en sus normas de desarrollo y, subsidiariamente, por los establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en sus normas complementarias.”* Por tanto, considera aplicable el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015, en lo sucesivo) que establece el plazo de tres meses. Este criterio ha sido seguido por dictámenes posteriores como el Dictamen nº 356/22 de 7 de junio y por otros consejos consultivos autonómicos. Así, podemos citar los Dictámenes nº 366/2021, de 16 de junio, y nº 387/2021, de 23 de junio, del Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana, el Dictamen nº

203/2021, de 6 de octubre, del Consejo Consultivo de Asturias o el Dictamen nº 19/2021 del Consejo Consultivo de Galicia.

Finalmente, ésta ha sido la postura fijada por el Tribunal Supremo para todos aquellos supuestos como el informado en el que no exista previsión normativa específica. Así la Sentencia del Tribunal Supremo, Sección 3ª, nº 138/2024, de 29 de enero –recurso nº 1028/2021-, ha concluido que:

“En respuesta a la cuestión de interés casacional ha de afirmarse que los procedimientos de resolución contractual son procedimientos autónomos. Cuando las leyes aplicables no establezcan un plazo de caducidad específico para tramitar y resolver el procedimiento de resolución resultará de aplicación supletoria la Ley 39/2015.

En el supuesto que nos ocupa, el artículo 212.8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del Sector Público, que establecía un plazo de caducidad de 8 meses para la instrucción y resolución de los expedientes de resolución contractual, fue declarado inconstitucional y expulsado del ordenamiento jurídico por STC 68/2021 de 18 de marzo, por lo que, a falta de otra previsión legal específica, resultaba de aplicación el plazo de tres meses previsto en el art. 21.3 de la Ley 39/2015” (El subrayado es nuestro).

En lo que atañe al caso informado, en consecuencia, se ha respetado el plazo máximo de duración del procedimiento a la vista del acuerdo de incoación aportado al expediente de fecha 24 de febrero de 2025, anteriormente citado.

Por lo expuesto, procede emitir la siguiente:

CONCLUSIÓN

ÚNICA. –Se informa favorablemente la propuesta de resolución del contrato de servicios denominado “Realización de la LXXXVII Subasta Nacional de Ganado Selecto. Año 2024”, sin perjuicio de las observaciones formuladas en el presente dictamen.

Es cuanto se tiene el honor de informar. No obstante, V.I. resolverá.

Madrid, a 14 de marzo de 2025.

**El letrado jefe adjunto del Servicio Jurídico en la Consejería de
Medio Ambiente, Agricultura e Interior.**

Firmado digitalmente por: SANZ IGLESIA SALVADOR FERNANDO
Fecha: 2025.03.14 13:24

Salvador Sanz Iglesia

**ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, AGRICULTURA E INTERIOR.**